



AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO

PROCESO	Ordinario laboral
DEMANDANTE	María Eugenia Rojas Deosa
DEMANDADO	Bancolombia S.A.y Colpensiones
RADICADO	05-001-31-05-020-2019-00612
TEMA	Título pensional
DECISIÓN	Confirma sentencia.

El quince (15) de mayo de dos mil veintitrés (2023), el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, integrada por los magistrados **HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ, CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA** y **GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ**, quien actúa como ponente, previa deliberación del asunto, según consta en el ACTA **099** de discusión de proyectos, procede a dictar sentencia de segunda instancia dentro del proceso ordinario promovido por **MARÍA EUGENIA ROJAS DEOSA** contra **BANCOLOMBIA S.A.** y la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES-**, con radicado 05-001-31-05-**020-2019-00612**, para efecto de resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada.

• **PRETENSIONES:**

La demandante pretende que se condene a BANCOLOMBIA S.A. al pago del bono o título pensional a su favor por el período comprendido entre el 21 de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1981 o en su defecto que dicho bono, título pensional o saldo pendiente sea entregado al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES hoy COLPENSIONES, a fin de que esta última lo liquide con fundamento en la ley; lo que se demuestre Ultra y extrapetita y costas procesales.

- **HECHOS:**

Las anteriores pretensiones las fundamenta en los hechos siguientes: que nació el 12 de agosto de 1956, que fue afiliada al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES el 01 de enero de 1982, hasta el 31 de diciembre de 1990.

Que laboró en Bancolombia desde el 21 de enero de 1.976 hasta el 31 de diciembre de 1990 y que no esta no realizó cotizaciones a pensión por los periodos de 21 de enero de 1.976 al 31 de diciembre de 1.981.

Que mediante escrito realizado el 15 de abril de 2019 ante la demandada solicitó el pago de aportes obligatorios a seguridad social por los periodos antes mencionado y que BANCOLOMBIA S.A. mediante comunicado del 23 de abril de 2019, le manifestó que, para esas fechas en el Municipio de Apartadó, el ISS hoy Colpensiones aún no tenía cobertura.

- **CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA:**

COLPENSIONES contestó así: Que no le consta si existió una relación laboral entre la demandante y Bancolombia entre los períodos indicados, se opone a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones contenidas en el libelo petitorio de la demanda, por carecer estas de fundamentación legal y fáctica. Y como excepciones planteó:, inexistencia de las obligaciones reclamadas, cobro de lo no debido e imposibilidad de condena en costas.

Por otro lado, BANCOLOMBIA S.A. respondió a la demanda así: que admite, que entre las partes existió una relación laboral por el período indicado por la actora, sobre las cotizaciones por del 21 de enero de 1.976 al 31 de diciembre de 1.981 indicó que, no se realizaron toda vez que el ISS no había empezado su cobertura en el municipio de Apartadó. Se opuso a las pretensiones, indicando que la demandada afilió y cotizó lo que le correspondía, que no realizó deducción alguna a la empleada con anterioridad a la fecha en que dicha afiliación se hizo posible en la zona de Apartado. Y como excepciones planteó: Prescripción, inexistencia de causa petendi, pago y buena fe.

- **SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA:**

El 2 de junio de 2022, el Juzgado Vigésimoquinto Laboral del Circuito de Medellín, desató la litis **CONDENANDO** a BANCOLOMBIA S.A. a cancelar a COLPENSIONES el valor del cálculo actuarial por el tiempo laborado por la demandante por el período comprendido entre el 21 de enero de 1976 y el 31 de diciembre de 1981, concediéndole un término de quince (15) contados a partir del día siguiente de la notificación que del cálculo actuarial realice Colpensiones así mismo, se condenó a COLPENSIONES a que dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, si aún no lo hubiere hecho, efectúe la liquidación del cálculo actuarial a favor de MARIA EUGENIA ROJAS DEOSA y a cargo de la sociedad BANCOLOMBIA S.A. por el período comprendido entre el 21 de enero de 1976 y el 31 de diciembre de 1981, incluyendo los respectivos intereses de mora teniendo en cuenta como Ingreso Base de Cotización los salarios que, mes a mes, devengó la trabajadora durante los períodos aludidos y que una vez la sociedad demandada pague el título pensional a Colpensiones, esta entidad deberá acreditar en la historia laboral de la accionante, un mínimo de 310,14 semanas, correspondientes a dichos períodos. Condenó en costas a COLPENSIONES y BANCOLOMBIA S.A., por partes iguales. Agencias en derecho en esta instancia en la suma de \$1.000.000 a favor de la demandante.

- **APELACIÓN:**

✓ BANCOLOMBIA:

Interpuso el recurso de apelación, argumentando que, la accionada actuó en todo momento en consonancia con la normatividad vigente, no asistiéndole ninguna obligación de afiliación, mucho menos el cumplimiento culposo que pueda acarrear el no haber realizado del pago del cálculo actuarial referido en la sentencia, dado que esto era un imposible, no solo jurídico sino físico, no incurriendo en ninguna omisión que pueda hacerle atribuible ahora responsabilidad alguna, dado que la omisión de fue orden administrativa por parte del ISS, no existiendo a su cargo obligación alguna de afiliación y pago de cotización. Solicita se revoque la decisión tomada.

- **ALEGATOS:**

✓ BANCOLOMBIA S.A.:

El apoderado judicial de la entidad, en sus alegatos expuso:

“que la accionada judicial actuó en todo momento en consonancia con la normatividad vigente a la sazón, y por ende, con fundamento en ella, no recaiga sobre la misma ninguna obligación de pago de cotizaciones a la seguridad social, pues además, ello era un imposible, no solo jurídico sino físico, por lo que en consecuencia no es posible que haya incurrido en una omisión que pueda hacerle atribuible o endilgable ahora responsabilidad alguna, dado que no existía a su cargo obligación alguna de afiliación y pago de cotización.”}

Trae a colación la sentencia SL 506 DE 2001

Además indica que,

“Con lo brevemente expuesto se ratifica y reitera lo ya expresado por mi poderdante desde los inicios del proceso, argumentos claros, coherentes y ceñidos a la legislación que en su momento tenía que aplicar; motivo por el que los cambios y desarrollo jurisprudenciales no pueden afectarla para imponerle cargas que no estaban atribuidas a ella, y que si bien propenden por salvaguardar los derechos del empleado, situación que compartimos, no por ello debe imputarse la carga de la misma a el empleador, pues no fue éste quien diseñó y determinó el sistema, su operancia y funcionamiento en todo el país, no régulo la materia que finalmente lleva a que situaciones como estás perjudiquen a los empleadores, quienes no hicieron más que ceñirse a las normas de turno y sin embargo les impone el asumir cargas económicas que no estaban radicadas en cabeza suya, y que en todo caso, de haber querido hacerlas, tampoco hubiera podido, pues no existía oficina alguna en el municipio de Apartadó para que hubiese realizado el pago de las referidas cotizaciones.”

✓ COLPENSIONES:

La apoderada judicial de la entidad, en sus alegatos expuso que:

“desatendida la obligación por el empleador de afiliación de su empleado, éste debe subsanar su negligencia con el pago del pasivo liquidado por la entidad administradora, con base en el cálculo actuarial. Por su parte, a este último extremo de la relación le corresponde (i) fijar el monto total adeudado, (ii) recibir la cancelación por parte del incumplido o activar los medios de cobro con los que disponga.

Sin embargo, como se dejó sentado en precedencia, donde la misma Corte Constitucional ordena que ese empleador deberá allegar la documentación necesaria que para los efectos requiera la entidad

administradora de pensiones, debe condicionarse el pago de ese cálculo actuarial al lleno de los requisitos exigidos, de lo contrario nos podríamos encontrar en situaciones fraudulentas al sistema general de pensiones y evasión fiscal, última circunstancia, auditada y para el caso concreto de las omisiones de afiliación, por la Unidad de Gestión Parafiscal UGPP, en los términos del artículo 314 de la ley 1819 de 2016, que modificó el artículo 179 de la ley 1607 de 2012.

Por todo lo anterior, en el evento de confirmarse la sentencia, solicito se ordene a la demandada si resulta condenada, cancelar a satisfacción de la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, el cálculo actuarial que corresponda con los respectivos intereses a que haya lugar, por la omisión de pagar íntegramente los aportes al sistema de seguridad social en pensiones.

De otro lado de manera muy respetuosa, se solicita que en el grado jurisdiccional de consulta se revoque la condena en costas contra COLPENSIONES, toda vez que la entidad actuó de buena fe en la labor misional que surge precisamente de la estricta aplicación de la Constitución, no tiene soporte una condena por este hecho, pues la entidad actúa según lo ordena la característica filosófica de sus funciones, no puede ejecutar hechos prohibidos por las leyes y menos violar sus propios reglamentos, como en caso concreto de este proceso, pues era responsabilidad del empleador realizar los aportes obrero patronales y adicionalmente no existía cobertura del sistema de segura social en pensiones en el lugar donde la demandante prestó los servicios para la época, de tal suerte que era imposible para el ISS, entrar a realizar cobros por relaciones laborales que estaban fuera de su esfera.

✓ DEMANDANTE:

El apoderado judicial de la demandante, en sus alegatos expuso que:

Me ratifico su señoría en lo expuesto en el libelo demandatorio, teniendo en cuenta todos los elementos presentados a lo largo de esta audiencia y haciendo énfasis en los siguiente:

Quien incumplió presuntamente con su deber legal como empleador, de la demandante, MARIA EUGENIA ROJAS DEOSA, de consignar el respectivo aporte al sistema de seguridad social en pensiones fue Bancolombia. Ante la hipótesis de omisión en la afiliación del trabajador al sistema de pensiones es deber de las entidades de seguridad social tener en cuenta el tiempo servido como tiempo efectivamente cotizado.

Por consiguiente, el empleador tiene la obligación de pagar un cálculo actuarial por los tiempos omitidos, a satisfacción de la respectiva entidad de seguridad social. Así lo aseguro la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, por medio de una sentencia que resolvió un recurso de casación (...)

En consecuencia, de lo anteriormente expuesto y como se manifestó en la audiencia efectuada en el juzgado veinticinco laboral del circuito de

Medellín, pido su señoría se ratifique y condene a las demandadas a reconocer y pagar todo lo solicitado en las pretensiones de la demanda”.

CONSIDERACIONES

Teniendo en cuenta que BANCOLOMBIA S.A. fue el único apelante, resulta claro que el Tribunal apenas tiene competencia para revisar los puntos de inconformidad expuestos en la apelación.

No ofrece duda alguna, que la señora MARÍA EUGENIA ROJAS DEOSA laboró al servicio de BANCOLOMBIA S.A. en el municipio de Apartadó, entre el 21 de enero de 1.976 hasta el 31 de diciembre de 1990, como se aceptó al dar respuesta al hecho tercero por parte de Bancolombia S.A.

Sobre las inconformidades planteadas por la parte demandada, esta Sala manifiesta lo siguiente:

La ley 6ª de 1945 estableció el primer Estatuto Orgánico del Trabajo, el cual tenía como finalidad reglamentar las relaciones que surgían entre empleadores y trabajadores, las convenciones de trabajo, los conflictos colectivos y la jurisdicción especial.

En su artículo 14 instauró las prestaciones que se encontraban a cargo del empleador, dentro de las cuales estaba la pensión de jubilación. Sin embargo, dicha prestación la asumiría hasta la creación de un Seguro Social, el cual sustituiría al empleador y se apropiaría de los riesgos de vejez, invalidez y muerte.

Con la expedición de la ley 90 de 1946 se creó el Seguro Social obligatorio para todos los individuos, nacionales y extranjeros, que prestaran sus servicios a otra persona en virtud de un contrato expreso o presunto de trabajo o aprendizaje e instituyó para su manejo el Instituto Colombiano de Seguros Sociales.

El artículo 72 de la anterior ley expuso: “Las prestaciones reglamentadas en esta ley, que venían causándose en virtud de disposiciones anteriores a cargo de los patronos, se seguirán rigiendo por tales disposiciones hasta la fecha en que el

seguro social las vaya asumiendo por haberse cumplido el aporte previo señalado para cada caso. Desde esa fecha empezarán a hacerse efectivos los servicios aquí establecidos, y dejarán de aplicarse aquellas disposiciones anteriores”.

De igual forma, el artículo 1º del decreto 3041 de 1966, o Reglamento General de los Seguros de invalidez, vejez y muerte, en desarrollo de la Ley 90 de 1946 y con fundamento en la norma que se acaba de citar, ordenó la afiliación de los trabajadores a dicho régimen, pero no lo hizo para todas las poblaciones del país a un mismo tiempo, pues en algunas de ellas llamó a afiliación obligatoria con posterioridad a esa fecha, e incluso en otros casos, nunca realizó tal llamamiento hasta la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993.

De tal suerte que en aquellas zonas en las cuales no se hizo efectiva la afiliación obligatoria de los trabajadores al ISS, continuaba rigiendo la regla anterior conforme a la cual era el empleador el directo responsable del reconocimiento de las respectivas pensiones siempre que se reunieran los requisitos exigidos en el sistema del código, que para el evento de la jubilación, consistían en el cumplimiento de 20 años continuos o discontinuos al servicio de ese empleador y 60 años de edad en el caso de los hombres, o 55 en el de las mujeres.

Ahora bien, la demandante pretende entonces que su ex empleador emita el título pensional por el lapso durante el cual, antes de la afiliación al sistema pensional, no se realizaron aportes, incluso por la no obligatoriedad jurídica de hacerlo dada la restricción de la cobertura en la zona geográfica donde aquel prestaba el servicio.

Se ha entendido el título pensional como aquel cálculo actuarial que están obligados a trasladar al ISS las empresas o empleadores del sector privado que, con anterioridad a la vigencia del Sistema General de Pensiones establecido en la ley 100 de 1993, efectuaban directamente el reconocimiento y pago de pensiones, en relación con los trabajadores que seleccionen el Régimen de Prima Media, siempre que el contrato de trabajo estuviere vigente al 23 de diciembre de 1993, o se hubiere iniciado con posterioridad a dicha fecha.

De hecho, las pensiones en el Régimen de Prima Media que administra COLPENSIONES se financian con títulos pensionales, justamente para aquellos trabajadores que después del 1º de abril de 1994 seleccionaron el Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por el ISS, siempre y cuando al 23 de diciembre de 1993 estuvieren laboralmente activos en empresas privadas que tenían a cargo sus propias pensiones.

Exigencia ésta que se corrobora con el artículo 1º del decreto 1887 de 1994, que reglamentó lo concerniente a la metodología para el cálculo de la reserva actuarial o cálculo actuarial que deberán trasladar al ISS las empresas o empleadores del sector privado que, reitera esta Sala, con anterioridad a la vigencia del Sistema General de Pensiones, tenían a su cargo el reconocimiento y pago de pensiones, en relación con sus trabajadores que seleccionen el Régimen de Prima Media con Prestación Definida, solo a favor de los trabajadores cuyo contrato de trabajo estuviere vigente al 23 de diciembre de 1993, o se hubiere iniciado con posterioridad a dicha fecha. Así lo manifestó la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia 21925 del 22 de junio de 2005.

Aplicando lo dicho al presente caso, entonces, se concluye que la actora reúne los requisitos en cuestión para la procedencia del cálculo actuarial pretendido. Sin necesidad de más consideraciones al respecto, se **CONFIRMARÁ** la sentencia del juzgado de instancia por las razones que se han dejado consignadas.

Las costas procesales de la primera instancia como lo dijo la juez. En esta instancia son a cargo de la parte actora, por no haber salido avante el recurso de apelación. Las agencias en derecho de la segunda instancia se tasan en la suma de \$1.160.000.

Por lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

RESUELVE:

PRIMERO: Se **CONFIRMA** la sentencia de primera instancia, que se revisa por vía de apelación y consulta.

SEGUNDO: Las costas procesales y agencias en derecho como se dijo en la parte motiva de esta sentencia.

Se notifica lo resuelto por **EDICTO**. De no ser susceptible del recurso extraordinario de casación se ordena devolver el expediente al juzgado de origen.

Los Magistrados,



GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ



SECRETARÍA SALA LABORAL

EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

PROCESO	Ordinario
DEMANDANTE	María Eugenia Rojas Deosa
DEMANDADOS	Bancolombia S.A.y Colpensiones
RADICADO	05-001-31-05-020-2019-00612
DECISIÓN	Confirma sentencia
MAGISTRADO PONENTE	Guillermo Cardona Martínez

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado el 14 de abril de 2023 a las 8:00am

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Se desfija el 14 de abril de 2023 a la 5:00pm


RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO